

INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS PRESENTADAS POR LA UTE SERVEO SERVICIOS S.A.U. – SANIVIDA, S.L., EN LA LICITACION DEL CONTRATO 138/2023 “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA AVANZADA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”. Expte.: 138/2023 (A/SER-021487/2023) LOTE 1

ANTECEDENTES

= EMPRESA EN BAJA TEMERARIA=

El 5 de febrero de 2024, se celebra Mesa de Contratación para la apertura de las ofertas económicas y revisión de la documentación relativa a la valoración de los criterios automáticos, del contrato de servicios 138/2023 “*Servicio de teleasistencia domiciliaria avanzada de la Comunidad de Madrid*”. A la vista de los precios ofertados, la mesa de contratación entendió que el contenido en la siguiente proposición económica podría ser considerado como anormal o desproporcionado de acuerdo con lo previsto en el apartado 9 de la cláusula primeradel Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

- Lote 1: UTE – SERVEO SERVICIOS, S.A.U – SANIVIDA

La apertura de la oferta económica y mejoras de la empresa **UTE – SERVEO SERVICIOS, S.A.U – SANIVIDA** correspondiente al Lote 1 arroja el siguiente resultado:

1. Oferta Económica: baja del 22,78 % sobre el valor estimado del contrato. Esto es, frente al precio unitario que establece la unidad promotora de 30,33 €, la empresa UTE – SERVEO SERVICIOS, S.A.U – SANIVIDA presenta una oferta de precio, por unidad de instalación de dispositivo de Teleasistencia avanzada de 23,42 €.
- 2 Mejoras: Puesta a disposición de un 20% adicional de Tablets (760 para el Lote 1) y bolsa económica adicional para adquisición de dispositivos vinculadas al servicio de Teleasistencia de hasta 60.000,00€
Efectuados los cálculos conforme a las fórmulas anteriores, se comprueba que la oferta de la empresa UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - SANIVIDA incurre en presunción de anormalidad, según estos parámetros, la Mesa de Contratación, en aplicación del artículo 149.4.f.4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acuerda requerir a los licitadores de conformidad con el artículo 149.2 b) para que *justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, en especial los gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos*”, otorgándole para ello un plazo de diez días hábiles.

La entidad requerida, en base a lo establecido en el referenciado apartado 4º del artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, debía por lo tanto, motivar de forma detallada, justificando y razonando que, pese al ahorro de dicha oferta, está en condiciones de ejecutar el contrato en los términos expresamente

recogidos tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como en el Pliego de Prescripciones Técnicas que traen causa.

En fecha 21 de febrero de 2024, con Registro de entrada ref.: 08/382877/24, se presenta justificación de los precios ofertados para la viabilidad su propuesta económica, por la empresa UTE-SERVEO SERVICIOS, S.A.U. – SANIVIDA en el Lote 1, donde se ratifica en la proposición económica presentada, desglosa los costes y realiza una justificación, junto a una explicación las medidas de ahorro, que repercuten directamente en los costes del contrato.

El esquema metodológico de justificación, se identifica con el de los cálculos presentados por la unidad promotora, en la Memoria Económica y/o pliego de prescripciones técnicas del contrato referenciado Expte.: 064/2024 (A/SER-043187/2023), a saber:

1. Previsión de personas usuarias y duración del Servicio
2. Costes de personal.
 - 2.1. Sueldos y salarios
 - 2.2. Antigüedad derivada de la subrogación del personal
 - 2.3. Gastos de desplazamiento (perfil de Coordinador)
 - 2.4. Complementos de nocturnidad y de festividad
 - 2.5. Complementos salariales consolidados
 - 2.6. Suplencias por vacaciones, incapacidad...
 - 2.7. Costes Seguridad Social, con cargo a la empresa (33%)
 - 2.8. Absentismo (7,1%)
3. Costes de inversión en equipos de Teleasistencia (bolsa de hasta un máximo de 15.000 €, sin perjuicio de las mejoras que pudieran ofertarse, para el caso que los terminales y dispositivos proporcionados por la Comunidad de Madrid, fueran insuficientes)
4. Costes de inversión en otros equipamientos.
 - Material informático (ordenadores, servidores, centralitas, licencias...)
 - Acondicionamiento del local y oficina,
5. Costes de puesta en marcha e instalación - desinstalación de equipos.
6. Arrendamiento de edificios y vehículos.
7. Costes de telefonía y comunicaciones (infraestructura, coste llamadas, tarjetas SIM, dispositivos móviles, conexiones a internet)
8. Costes de suministros, reparaciones y conservación (electricidad, agua, limpieza, seguros, mantenimiento...)
9. Gastos generales y otros costes indirectos (5%)
10. Beneficio industrial.

Formalmente, la memoria responde al criterio del objeto de licitación, si bien resulta necesario analizar materialmente la propuesta presentada. Este informe, por lo tanto, tiene como objeto valorar y determinar si la empresa UTE -SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - SANIVIDA, (en relación al Lote 1), cuya oferta económica se encuentra incurso en baja temeraria, ha fundamentado adecuadamente su oferta económica, esto es, si las justificaciones presentadas para la reducción de las distintas partidas de costes previstas en el PPTP, pueden ser aceptadas.

= EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATACIÓN: LA TELEASISTENCIA AVANZADA FRENTE A LA BÁSICA=

El objeto del contrato es el servicio de teleasistencia avanzada. Es pertinente entrar a diferenciar las prestaciones que ofrece la teleasistencia avanzada frente a su antecesor, la teleasistencia básica. Las mejoras que se exponen a continuación son la causa directa de que el precio del contrato en trámite haya crecido exponencialmente, en comparación con los licitados previamente por la Comunidad de Madrid.

El servicio de teleasistencia básica que hasta ahora ha venido prestando la Comunidad de Madrid a las personas en situación de dependencia, para facilitar la asistencia a las personas beneficiarias de forma ininterrumpida, mediante el uso de la tecnología de la información y de la comunicación, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, de inseguridad, soledad y aislamiento, se lleva a cabo a través de la instalación de un terminal analógico en la vivienda de la persona beneficiaria conectado a un dispositivo de activación personal o pulsador y a una central receptora, con la que se comunica en caso de urgencia, desplazando una unidad móvil al domicilio cuando se precisa.

A diferencia de la básica, la teleasistencia avanzada es aquella que incluye, además de los servicios de teleasistencia básica que la persona usuaria precise, los apoyos tecnológicos complementarios dentro o fuera del domicilio, o en ambos casos, así como la interconexión con los servicios de información y profesionales de referencia en los sistemas sanitario y social, desarrollando procesos y protocolos de actuación en función de la situación de necesidad de atención detectada.

El Servicio de Teleasistencia Avanzada para personas en situación de dependencia de la Comunidad de Madrid se constituye en un servicio de atención personalizada, en el cual se asignan prestaciones e intensidades de servicio en función de las necesidades particulares de la persona beneficiaria con programas de atención integral y tecnología complementaria en función de las características de la persona, con la instalación de terminales digitales conectados con dispositivos de seguridad (fuego/humo, gas), así como dispositivos periféricos funcionales para la detección de caídas, la detección de movilidad/pasividad, la disponibilidad de teleasistencia móvil con geolocalización, así como adaptaciones para personas con déficits sensoriales. Estos dispositivos, poco invasivos e integrados en el domicilio de los beneficiarios, estarán conectados a una plataforma de información que permita el seguimiento del servicio, así como el desarrollo programas de actividades, de estimulación cognitiva o de tele- rehabilitación físico-funcional, o el desarrollo de proyectos piloto de supervisión remota.

Entre las principales características de este Servicio de Teleasistencia (Avanzada) destacan:

- Personalizado: basado en el Modelo de Atención Centrada en la Persona, asigna prestaciones e intensidad de servicio en función de las necesidades e intereses de la persona.
- Humanizado: con una mayor implicación de los profesionales del Servicio para ajustar la atención a las preferencias de la persona usuaria.
- Cercano: con la incorporación del tele-operador/a de referencia.
- Proactivo: se anticipa a las demandas de las personas usuarias para prevenir situaciones de riesgo y aumentar su seguridad.
- Predictivo: con la incorporación de información a través de patrones de comportamiento, y análisis de hábitos, que nos permite predecir situaciones de riesgo y mejorar la toma de decisiones en el cuidado de las personas.

- Accesibilidad universal: utilizando soluciones tecnológicas que permitan el acceso al servicio a personas con diversidad funcional.
- Digital e interoperable: con la incorporación de dispositivos que faciliten la vida de las personas usuarias y permita anticiparse a posibles deterioros cognitivos, e interoperable con otras plataformas existentes (de servicios sociales y sanitarias) con el fin de poder compartir toda la información relevante de la persona usuaria.
- Seguro: la digitalización del parque tecnológico permitirá realizar auto chequeos continuos que garantizarán el funcionamiento correcto del servicio. Igualmente, el servicio se dotará de las limitaciones y medidas de seguridad que garanticen una privacidad de las personas, adaptada a sus necesidades del mismo.

Entre los resultados esperados de la Teleasistencia (Avanzada), cabe destacar el objetivo de alcanzar los siguientes objetivos:

- i. Integrar en el servicio todas las potencialidades que ofrece la digitalización de las nuevas redes de telecomunicaciones y la evolución de los modelos Big Data y de Inteligencia Artificial.
- ii. Constituir un servicio predictivo, preventivo e integral.
- iii. Realizar un análisis individualizado y adaptado a las preferencias y necesidades de las personas usuarias del servicio y de sus familiares y cuidadores/as.
- iv. Hacer extensible el servicio a la práctica totalidad de la población en situación de dependencia.

En resumen, el salto cualitativo en la prestación del servicio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, se traduce en un aumento del gasto, como consecuencia de las prestaciones que incluye, lo que redundará en un incremento exponencial del precio del contrato, en relación con las versiones anteriores, tal y como queda fundamentado en la memoria económica (así como en el resto del expediente).

= CRITERIOS OBJETIVOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN : VINCULACIÓN DE LAS OFERTAS A LAS RATIOS
Y CONDICIONES ESENCIALES DE LOS PLIEGOS=

Tanto el pliego de prescripciones técnicas como el de cláusulas administrativas del expediente Expte.: 138/2023 (A/SER-021487/2023), están basados en criterios objetivos e imparciales, que han servido de fundamento para el cálculo de los costes, así como para configurar el marco temporal y el alcance de cada prestación, fijándose, en su caso, unas ratios o niveles mínimos.

Al respecto, en las páginas 7, 8 y 26 de la justificación presentada por la entidad, se aprecia que, adicionalmente, se invoca por la entidad el posicionamiento en el mercado, el conocimiento del sector, la preeminencia entre las entidades prestatarias del servicio en el ámbito territorial de referencia etc.

La posición en el Mercado sólo es invocada, pero no se aportan datos que permitan ser analizados objetivamente por la unidad promotora. El posicionamiento en el mercado, como realidad que puede suponer a SERVEO SANIVIDA ofrecer precios más competitivos, debería, por tanto, ir acompañado con una ilustración de soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios. Asimismo, ha de permitir a la administración descartar toda posibilidad de abuso de posición, alteración de la competencia, o de prácticas desleales en el mercado.

La Resolución 877/2017, de 3 de octubre del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, *“La doctrina de este Tribunal sobre el alcance y objeto de ese resultado es constante y unánime en el sentido de señalar que el hecho de que una oferta se encuentre en presunción de anormalidad constituye un mero indicio, que en ningún caso puede dar lugar a la exclusión automática de la oferta, sino que necesariamente en todo caso, debe el órgano de contratación iniciar un procedimiento contradictorio,(...). A la vista de dicha documentación y justificaciones, el rechazo de la oferta exige de una resolución debidamente motivada que razone por qué las justificaciones del licitador no explican satisfactoriamente el bajo nivel de precios ofertados. Por el contrario, cuando de lo que se trata es de admitir la justificación presentada por el licitador, no es necesario que se contenga una motivación exhaustiva (resolución nº 637/2015)”*.

Esto es, La justificación de la empresa ha de ir dirigida a demostrar la viabilidad de la oferta por referencia fundamentada al cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato, respetando las condiciones de licitación establecidas en los pliegos. Si así no fuera, el cumplimiento del contrato no se considerará viable y la proposición inaceptable. El pliego establece unas reglas que garantizan la igualdad de los licitadores en el procedimiento de licitación, que a la vez prohíbe que cualquier licitador se apoye para conseguir una ventaja, en condiciones que no se establecen en el pliego. Esto es, sin perjuicio del análisis de los conceptos objetivos previstos en el pliego, las alegaciones que se invocan fuera de los criterios económicos, no pueden ser analizadas ni evaluadas.

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN

Argumento Primero. –ERROR CONCEPTUAL DE LA ENTIDAD EN LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE DE LICITACIÓN

Respecto a la primera de las cuestiones que plantea la UTE -SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - SANIVIDA, se detecta una confusión entre la reducción del coste por unidad, en relación a la reducción proporcional del valor estimado del contrato por disminución de los plazos de ejecución (clausula primera, apdo. 18 del PPTP).

El PCAP establece un plazo de ejecución de 24 meses (del 01.10.2023 al 30.09.2025), si bien prevé que de no iniciarse en la fecha prevista el importe del contrato *“...se adecuará proporcionalmente a la disminución del plazo experimentada por el retraso en el inicio de la ejecución.”*

Es necesario destacar en este punto que, si bien el retraso en el inicio de la ejecución real del contrato supone un ajuste a la baja en el plazo de ejecución, el precio unitario se ha calculado por la instalación de cada dispositivo. Esto es, la reducción del plazo de ejecución, no conlleva la reducción del precio por instalación de cada dispositivo (precio por terminal, según denominación de los pliegos).

Esto es, el precio estimado del contrato se ha calculado, no sobre la base de las mensualidades, sino sobre el coste de cada terminal en funcionamiento. Una reducción del plazo de ejecución, no equivale a que la instalación de cada terminal tenga un mayor o menor coste, porque no se ha incluido en el cálculo el impacto temporal (coste mensual) del servicio

Por lo tanto, el precio en base a cada unidad de instalación no se ve alterado, ni tampoco el objeto de la prestación, en tanto en cuanto el adjudicatario deberá de garantizar el cronograma previsto de desinstalaciones e instalaciones de terminales, durante la duración real del contrato sea esta mayor o menor. En consecuencia, la disminución proporcional de la duración del contrato, no conlleva la reducción proporcional en la cuantía unitaria, base del precio base de licitación, ni la calidad del servicio a prestar.

Argumento Segundo. REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE PERSONAL: EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Y RIESGO DE FALTA DE COBERTURA

Previo al análisis de las partidas correspondientes a personal en las que se ha presentado una reducción de los importes por la entidad, se ha de tener presente que todo el expediente de contratación en curso ha basado el precio base de licitación, respecto a los costes de personal, a lo estrictamente establecido en el Convenio Colectivo aplicable, que es el Convenio Marco Estatal (VIII) de Servicios de Atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la Autonomía Personal. No cubrir los costes de personal previstos en los pliegos de contratación, conlleva, por lo tanto, no observar las normas convencionales aplicables al personal afecto al servicio, esto es una vulneración de la normativa laboral vigente.

El artículo 149, apartado 4º de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público, de 8 de noviembre, establece, de forma categórica y en relación con las bajas temerarias lo siguiente:

<<En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201>>

- a) Costes del personal: Insuficiencia del precio propuesto por la UTE -SERVEO SERVICIOS, S.A.U. – SANIVIDA para la cobertura de los costes de personal, en cómputo anual

Se ha procedido por esta unidad promotora a un análisis en detalle para determinar si la baja incursa presuntamente en anormalidad, (23,42 €) en atención al porcentaje que representa respecto al precio unitario determinado en el pliego (30,33 €), cubriría una anualidad de los costes salariales del servicio. De esta forma se dirime si con la baja propuesta, se cubrirían al menos, los costes salariales mínimos necesarios que se han incluido en el pliego para el ejercicio completo, correspondiente a la anualidad de 2024.

Esto es, se ha comparado si con el precio unitario que ofrece la UTE -SERVEO SERVICIOS, S.A.U. – SANIVIDA, multiplicándolo por el nº de terminales a instalar en doce mensualidades, tomando el año 2024, se cubrirían, al menos los costes salariales previstos para el 2024 en el precio licitación.

A la hora de analizar el impacto económico del contrato, se basa en los mínimos salariales, conforme jornada, conceptos y retribuciones, establecido en vigente “VIII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal”.

El resultado obtenido arroja el siguiente detalle:

Costes de Personal:

MEMORIA ECONOMICA PLIEGO 2024 (12 meses)	LOTE 1
Coste personal total	2.202.507,09 €

La empresa ha ofertado en su propuesta económica al Lote 1, la cantidad de 23,42 €

Debemos multiplicar esta cantidad por el número de usuarios totales de 2024, que aparecen reflejados en la página número 3 de la memoria económica publicada en el Portal de contratación:

	LOTE 1
Terminales 2023	4.351
Crecimiento	3.354
Totales	7.705

Y a continuación proceder a multiplicar por doce meses, al estar considerando únicamente el ejercicio 2024

	LOTE 1
precio unitario ofertado/usuario/mes	23,42 €
precio unitario ofertado total usuarios/mes	180.451,10 €
precio unitario ofertado total usuarios/año	2.165.413,20 €

Si el importe resultante, lo comparamos con los costes de personal en base a los cuales se ha establecido la cobertura del servicio y el precio base de licitación, se observa que con el precio ofertado por la entidad 23,42 € no se cubren los costes de personal para 2024, recogidos en los pliegos rectores de la contratación que han conjugado el número de terminales para el ejercicio, por lo tanto, no cubriría tampoco el servicio objeto de la licitación.

b) Costes de Personal: Otras deficiencias en la justificación de los costes salariales:

Formuladas a modo de gráfico las incoherencias puestas de manifiesto, la reducción que implica el precio ofertado por la entidad, se traduce en los siguientes porcentajes:

	Memoria económica (21 meses)	Justificación UTE - SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - SANIVIDA (21 meses)	Baja porcentual
Transporte	17.056,00 €	0,00 €	100 %
Suplencias	186.133,85 €	16.881,02 €	90,93%
C. Consolidados	40.537,09 €	15.151,54 €	62,62%
Absentismo	257.573,75 €	75.539,82 €	70,67 %
TOTALES	501.397,89 €	107.572,38 €	78,55 %

Respecto a estas partidas, destacan las siguientes incoherencias:

i. Incoherencias en la propuesta relativa a las suplencias:

Las suplencias de personal tienen por finalidad la continuidad del servicio a través de la cobertura de las ausencias por permisos, vacaciones y bajas temporales -por incapacidad transitoria- de los profesionales por otros de igual categoría y nivel.

La entidad, incurra en oferta temeraria, parte de un ahorro en este concepto porque sólo realiza el cálculo para dos categorías profesionales, cuando en realidad son 10 categorías profesionales, obviando los costes de suplencia para el resto de las categorías profesionales.

El coste que han calculado es en relación a dos categorías que se traducen en un 5,47%, en términos económicos de la plantilla prevista en el pliego para el contrato. El resto de las categorías, que suman el 94,53%, no ha previsto coste alguno por este concepto, lo que vuelve a recalcar la poca viabilidad económica de la propuesta. Si la empresa quiere que su propuesta económica sea aceptada como viable, sería necesario que avalara las fórmulas organizativas, o bien la metodología de los recursos humanos que utiliza para que esta unidad promotora pudiera evaluar si son viables y garantizar la continuidad y calidad del servicio. Sin embargo, no se aporta nada de lo anterior.

A ello se une que, si la reducción del coste se logra mediante una acumulación de funciones y tareasal mismo número de profesionales, dado que alegan que la sustitución será realizada entre a misma plantilla o personal propio de la empresa, la calidad del servicio se vería perjudicada, porque no se prestaría con la misma calidad. Aparte que podría suponer incumplir la normativa laboral, en relación a la duración de la jornada laboral.

ii. La reducción de los complementos salariales consolidados no puede acogerse, porque atenta a la inalterabilidad de los anexos de la plantilla de Subrogación del Personal del pliego.

iii. La entidad no contempla conceptos como los gastos de desplazamiento (transporte) previstos en el pliego y en el artículo 42 H) del VIII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes.

Los costes de desplazamiento es una partida esencial en este contrato, no sólo por la cuantía, sino porque es lo que va a garantizar la cohesión territorial del servicio, así como la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la teleasistencia avanzada. Para este lote, la partida es de 17.056,00€, cantidad que dada la zona geográfica que ha de cubrir es un precio mínimo, calculado en base a las tarifas del transporte público del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, equivalentes a la máxima zonificación (véase memoria económica página 7)

iv. El coste del absentismo Laboral:

Es destacable que la reducción del porcentaje del coste del absentismo laboral aportado por la empresa, no facilita la fuente de la información -muestran una imagen con porcentajes por Comunidades Autónomas en la página 7, de su oferta, pero no aportan la procedencia de los datos- en base a la cual proponen un porcentaje de absentismo profesional del 6%, en vez del 7,1% que está determinado en la memoria económica. Por lo tanto, con la falta de acreditación del origen de su porcentaje, no resulta posible aceptar dicha baja.

v. El sobredimensionamiento de los beneficios anudados a la condición especial de contratación de colectivos con dificultad de acceso al empleo: El literal del pliego establecía: *“incorporar a las plantillas, un porcentaje mínimo del 5% en el cómputo total del personal adscrito a la ejecución de contrato, de personas que cumpliendo los perfiles del PPT, estén incluidos en algunos de los colectivos de especial dificultad de acceso al empleo que se detallan”*. La entidad basa la reducción del coste en las bonificaciones a obtener gracias a la contratación de nuevo personal bonificable, debido a que tiene firmados convenios con entidades con las que se nutre de personal con discapacidad. No obstante, en no aportan prueba documental de los referidos convenios. La cuantía de ahorro propuesta, para esta partida, que asciende a

149.625€, resulta elevada, en tanto en cuanto las bonificaciones o subvenciones a obtener están anudadas a varios condicionantes que no pueden garantizar la obtención de las mismas. Esto es, toda la reducción propuesta sobre la base de las futuras reducciones por este tipo de contratación se reduce a una mera hipótesis, en la que no puede basarse una oferta económica en un proceso de licitación pública.

A este respecto, la Resolución del **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales n.º 514/2015**, relativa a la exclusión de oferta por considerarla desproporcionada, resuelve que la exclusión, ante la elevada desproporción de la oferta y su insuficiente justificación, está fundada, pues la empresa se limitó a argumentar que tiene la calificación de Centro Especial de Empleo, sin hacer referencia alguna a los salarios que pretendía aplicar a los trabajadores a subrogar o a los costes correspondientes a su sustitución por personal discapacitado. La motivación de la inviabilidad de la oferta no se basa en una afirmación apriorística sobre la imposibilidad de incluir ayudas y subvenciones para la determinación de la oferta, sino en un análisis justificativo de su falta de acreditación en relación con la misma.

Argumento Tercero: EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO NO EVIDENCIADO VERSUS COSTES CONSUSTANCIALES DEL FUNCIONAMIENTO

La mera referencia a la implantación en el mercado, argumento primero esgrimido por la entidad en este epígrafe, por sí sola no es suficiente para justificar la oferta anormalmente baja, menos aun cuando no se acredita a través de ningún estudio comparativo ni auditoría que lo avale.

Si bien es cierto que la entidad goza de reconocido prestigio en el sector, no lo es menos que otros licitadores, cuyas propuestas económicas no están en baja temeraria, también tienen un posicionamiento relevante en este nicho de mercado. Por ello, y porque así lo obliga el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público, la memoria justificativa de la baja debería haber plasmado y traducido en cifras y hechos este alegato, ya sea aportando datos sobre los avances técnicos con los que cuenta, ya sea ofreciendo información sobre la originalidad organizativa, o sobre el ahorro que consigue con las economías de escala con las que cuenta.

3.a) costes de puesta en marcha e instalación-desinstalación de equipos, el pliego prevé un coste de 56.000 € (referidos a 24 meses). La empresa rebaja el coste a 3.792,00 € (referidos a 24 meses) lo que supone una reducción del **93,23 %**. Esta reducción **no aparece motivada en su justificación**.

3.b) costes de suministros, reparaciones y conservación. La UTE alega un porcentaje de descuento del 96,01%, que queda insuficientemente justificado en base a acuerdos comerciales con proveedores a nivel nacional lo que le permite precios competitivos y que "las instalaciones que se utilizaran para prestar el servicio están en régimen de alquiler en cuya cuota está incluido el coste de energía auxiliar, mobiliario, etc.". La fundamentación presentada sería aceptable, siempre y cuando viniera acompañada de la documental acreditativa, esto es, de los acuerdos comerciales, y/o los contratos de alquiler que alegan.

3.c) En el capítulo de gastos generales llama la atención el porcentaje consignado 3,5%. El pliego, conforme exige la normativa vigente, se acoge a los costes medios del Mercado, en línea con otros contratos de similares características. Por ello, establece una partida por un 5%.

El porcentaje que propone la empresa resulta un poco limitado y difícilmente dará cobertura a cualquier imprevisto en la ejecución del contrato.

CONCLUSIÓN FINAL:

Se ha analizado y observado las alegaciones realizadas por la empresa, con los cálculos económicos aportados, no permiten concluir que la oferta vaya a cubrir la continuidad y calidad del servicio.

Sólo con las diferencias en los costes de personal, que la Administración ha calculado en base a la normativa convencional aplicable, la continuidad y calidad del servicio de teleasistencia avanzada se vería comprometida.

En el supuesto de que la empresa hubiera detectado errores en los cálculos realizados en el expediente de contratación por la Administración, debería haberlos señalado en la memoria justificativa presentada en su defensa, para que la Administración hubiera podido tener los antecedentes suficientes para evaluar la alternativa económica que presenta (en baja temeraria).

La inviabilidad de la oferta resultaría también de la circunstancia de que la empresa, no ha aportado suficiente prueba documental sobre la que la Administración pueda analizar y cuantificar los cálculos y propuestas económicas. A ello se añade que la empresa adiciona a su argumentario premisas y estimaciones subjetivas, que no pueden ser analizadas.

En este sentido, la Resolución **Resolución nº 025/2024**, del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, de 25 de enero de 2024 ha establecido que

“De todas estas resoluciones debemos extraer que cuando el órgano de contratación viene a admitir la oferta incurso en presunción de baja temeraria y no a excluirla, la prolija motivación para mantener la oferta que reclama el recurrente del órgano de contratación no es exigible. Y la aceptación de la oferta resulta ajustada a derecho, ya que una vez determinada la oferta incurso en presunción de anormalidad, se dio traslado para la justificación a la misma, habiendo efectuado dicha justificación en términos asumidos por el órgano de contratación.

En este contexto, la justificación del licitador incurso en presunción de anormalidad debe concretar, con el debido detalle, los términos económicos y técnicos de la misma, en aras a demostrar de modo satisfactorio que, pese al ahorro que entraña su oferta, ésta no pone en peligro la futura ejecución del contrato con arreglo a la oferta aceptada y en los propios términos de la misma. Ello exige demostrar que, gracias a las especiales soluciones técnicas, a las condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones del contrato, a la originalidad de la forma de ejecución de las mismas que se proponga aplicar, o a la posible obtención de ayudas, el licitador está en condiciones de asumir, al precio ofertado, las obligaciones contractuales exigidas y derivadas de su oferta, con pleno respeto de las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente y de las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que deba realizarse la prestación, todo lo cual en aras a demostrar que su oferta, pese a ser sensiblemente más baja que la de los demás licitadores, permite la futura viabilidad técnica y económica del contrato”. En el caso que nos ocupa, la mesa de contratación requirió a la recurrente, en aplicación del artículo 149.4 LCSP, para que presentara informe con justificación y desglose razonado y detallado de los precios ofertados. Dicha justificación fue presentada por la empresa requerida, en tiempo y en forma y considerada insuficiente por el departamento técnico asesor de la mesa de contratación.(...) Todas estas justificaciones resultan ahora extemporáneas, a lo que debe añadirse que la justificación aportada no contenía mención alguna en relación a los costes del Servicio de Desinfección, Desinsectación y Desratización, que conforme a Pliego asciende a 6.000 euros anuales.

En consideración a lo anterior y pese a que el informe técnico que sirvió de base a la exclusión contiene el error expresado, existen conceptos de la oferta que no fueron siquiera contemplados, otros no justificados,

adoleciendo la justificación aportada de explicación satisfactoria en relación a los cálculos, ahorros o bonificaciones, de forma que no se justificó adecuadamente la viabilidad de la oferta por parte de la recurrente”

Lo que se informa, a los efectos oportunos.

En Madrid, a la fecha de firma
Subdirección General de Servicios de Atención Domiciliaria y
Coordinación de Programas

Firmado digitalmente por: SANCHEZ ZABALA MARIA SANDRA
Fecha: 2024.04.12 10:42